

El año 2005 empezó y también terminó en Asia, como respuesta a la devastación en las costas de los países de sur asiático y en protesta por las maniobras de la Organización Mundial de Comercio en Hong Kong. En medio, pasó por una de las movilizaciones populares más importantes relacionadas con la solidaridad y la cooperación internacional, de la mano de la Campaña Internacional contra la Pobreza, y por la experiencia de la nueva política de cooperación del gobierno de Zapatero. Estos cuatro elementos formaron los ejes de este relato del año para el movimiento de solidaridad internacional.

El año fue testigo de dos de los peores desastres naturales en la historia reciente. El tsunami que azotó las costas de gran parte de Asia meridional durante las navidades de 2004 causó casi 300.000 muertos. Fue calificado por el Comité de Emergencias en Desastres (DEC) como el desastre más destructivo de su categoría y provocó un «ola de solidaridad» de la población de las sociedades occidentales en términos de donaciones a las organizaciones de ayuda humanitaria. Tanto Médicos Sin Fronteras como Oxfam cerraron sus llamamientos de solidaridad apenas un mes después del maremoto porque las donaciones superaron todas sus expectativas. En España, la Coordinadora de ONGD hizo un llamamiento específico tanto a las organizaciones como a los medios de comunicación para que no hicieran espectáculo de las personas víctimas del desastre con el fin de recaudar dinero.

La respuesta humanitaria de las ONG se llevó a cabo con un alto grado de coordinación. En cinco países europeos —Reino Unido, Bélgica, Austria, Alemania y Holanda— se pusieron en marcha sistemas únicos de recaudación de fondos que después canalizaron el dinero a las organizaciones según las necesidades específicas de las zonas donde se encontraban trabajando. También se puede destacar la vinculación de la ayuda de emergencia con la rehabilitación y el desarrollo en sí; las ONG más importantes han puesto en práctica una visión de más largo plazo que toma en cuenta la complejidad de las realidades donde trabajan.

Sin embargo, esta imagen de más competentes y de mayor sensibilidad de las organizaciones de cooperación fue rota por la publicación en diferentes medios de comunicación de una versión interna del informe de evaluación sobre la actuación de las ONGD en esta emergencia. Dicho informe contenía información adicional a la versión pública. Esta versión «secreta», que habla del tiempo «inaceptable» que pasaron las personas damnificadas en tiendas temporales, de la tendencia de priorizar la visibilidad de cada ONG hasta extremos ridículos y de la necesidad de «admitir errores», ha dañado la imagen pública de las ONGD, sobre todo en Reino Unido donde la BBC hizo un reportaje sobre la «falta de transparencia» de las organizaciones humanitarias.

En cuanto a la respuesta al terremoto que asoló la zona de Cachemira, dejando 70.000 muertos, la actuación ha sido más decepcionante. En primer lugar, el público no se ha volcado en apoyar las acciones de las ONGD (Caritas española informó que había recaudado 25 veces menos para esta emergencia que para el maremoto). Tampoco las instituciones; UNICEF denunció que la ayuda prometida sólo cubría una quinta parte de las necesidades. Además, la coordinación ha sido bastante peor y parece que no se están aprendiendo las lecciones de otras situaciones parecidas. Los medios de comunicación contaban de casos de peleas entre algunas ONGD por cuestiones de visibilidad y de zonas de actuación, y de mucha lentitud en la entrega de la ayuda, lo que ha dejado a las personas afectadas en una situación de gran vulnerabilidad ante la llegada del invierno. El desastre en Paquistán también ha vuelto a abrir el debate sobre la participación de las fuerzas armadas en las labores humanitarias, con el envío de un despliegue de tropas de la OTA N —con la participación de 370 soldados españoles— en la zona afectada.

Sigue existiendo un apoyo de la población muy sólido a las ONGD en España; un 86% de la población española cree que la labor de las ONGD aumenta el desarrollo de los países empobrecidos. Pero este voto de confianza en las organizaciones de cooperación al desarrollo se va de la mano de un reducido conocimiento de sus objetivos, de sus fuentes de financiación, y de sus estructuras y formas de funcionar. En este mar de desconocimiento, acompañado por una cobertura mediática poco crítica existen dos áreas en las que la ciudadanía se muestra más cauta con las ONGD. Por una parte, existe cierta percepción de desunión entre las organizaciones. El estudio de la propia Coordinadora estatal de ONGD sobre las percepciones de la población acerca de las organizaciones muestra que la gente piensa que su labor se realizaría mejor si hubiera mayor coordinación y un mayor compromiso de largo plazo. Por otra parte, la ciudadanía pide más transparencia de la gestión de las ONGD, lo que también serviría para consolidar la implicación de la sociedad en sus labores. A lo largo del año ha habido un creciente cuestionamiento al trabajo de dichas organizaciones por parte de activistas e intelectuales. A la cabeza de este análisis crítico se encuentra el profesor Carlos Gómez Gil, que este año ha publicado dos libros sobre las ONG en la globalización y las ONG en España, y que afirma que muchas ONG están haciendo el juego al sistema neoliberal con un discurso fuertemente anti-estatalista.

En España, como en el resto de Occidente —aunque también en otros países—, 2005 ha sido el año de la pulsera blanca. La Llamada Mundial contra la Pobreza ha involucrado a más de treinta millones de personas en todo el mundo y su manifestación cotidiana más visible ha sido el portar una banda blanca —en el pelo, la solapa, la muñeca, la cintura. Coincidiendo con la revisión de los Objetivos del Milenio y con las promesas de G8 de hacer 2005 el año de la reducción de la pobreza, la campaña —organizada en España por la Coordinadora estatal de ONGD— proponía acciones urgentes sobre la deuda externa, la ayuda al desarrollo y el comercio justo. A través de la presión política, la sensibilización y la movilización pública, la campaña establecía la justicia internacional como su objetivo, con un discurso que buscaba superar la caridad como opción para la cooperación internacional. En junio, la campaña

consiguió reunir a más de 50.000 personas en Madrid, mientras las protestas por la cumbre del G8 en Gleneagles, cerca de Edimburgo, juntaron a más de 250.000 manifestantes. Impresionante, pero supo a poco después de las manifestaciones contra la guerra en Irak en 2003. La campaña se puede considerar un éxito por su sensibilización de las instituciones y por poner encima de la mesa la necesidad de un cambio radical en las relaciones entre los países del Norte y del Sur. También marca un nivel de discurso que hará que algunas ONGD tengan que esforzarse para mantener una mínima coherencia con su comportamiento.

Sin embargo, su impacto global puede que quede más limitado. A pesar de la reducción de la deuda externa anunciada por los países del G8 —la total cancelación de la deuda multilateral para dieciocho países pobres, según el texto del acuerdo— la «histórica decisión» ha sido calificada de engañosa por la mayor parte de los actores no estatales, incluyendo la Coordinadora Estatal de ONG. Sólo afecta a los países que han cumplido años del ajuste estructural dictado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y produce anomalías tan graves como el hecho que a finales de año Nigeria (que no se ha beneficiado del acuerdo del G8) debe devolver al Reino Unido un total de 1.700 millones de libras esterlinas, lo que representa más que el presupuesto de ayuda británica al continente africano en su conjunto. En un análisis de esta oferta de cancelación de la deuda realizada por tres redes no gubernamentales especializadas en la materia, se concluye que hace falta la cancelación completa de la deuda externa de 62 países para que éstos puedan alcanzar los Objetivos del Milenio.

Tampoco ha conseguido un aumento sustancial de la ayuda al desarrollo de los países industrializados. En la cumbre del G8 en Gleneagles, los líderes de los países más industrializados prometieron duplicar la ayuda oficial al desarrollo para África Subsahariana, pero los movimientos posteriores han mostrado que países como Italia o Alemania se adhirieron a la declaración final del G8 para mantener un imagen de unidad, más que por los esfuerzos serios de alcanzar los porcentajes de ayuda establecidos en diferentes forums internacionales. De hecho, estos dos países, junto con Japón, Suiza y Bélgica, se alejaron aún más del compromiso histórico de destinar el 0,7% del PIB a la cooperación al desarrollo. Este último cortó su ayuda en más de 30% respecto al año anterior. Varios estudios han mostrado que Alemania necesitaría hasta el año 2087 para cumplir la promesa hecha por su entonces canciller Shroeder de alcanzar el 0,7% en «el medio plazo». El enfoque sobre África, promovido por el primer ministro británico y articulado mediante la Comisión para África que él mismo ha presidido, ha contribuido a aumentar la toma en consideración del continente a lo largo del año, pero el acuerdo final de los países más ricos sobre la región resulta ambiguo y no incluye cifras concretas de apoyo. Rusia, que asume la presidencia del G8 en 2006, parece poco dispuesta a mantener esta prioridad, con lo que se corre el riesgo de perder los avances de este año.

Por todo lo anterior será muy difícil conseguir los Objetivos de Milenio (ODM). Los cálculos de Naciones Unidas llevan a pensar que para el año 2010 serán necesarios unos 90.000 millones de dólares en ayuda adicional para conseguir el conjunto de los objetivos. Los compromisos del G8, aunque representen un aumento bienvenido, sólo hablan de un aumento de hasta 48.000 millones, es decir a poco más de la mitad.

En septiembre, ciento cuarenta y cuatro jefes y jefas de estado y de gobierno se reunieron en Nueva York para revisar el progreso hacia los ODM, cinco años después del Cumbre del Milenio que los estableció, y para debatir la reforma de Naciones Unidas. La campaña *Una Llamada Global contra la Pobreza* consiguió participar en la elaboración de los documentos preparativos de la cumbre, e introduce un nuevo nivel de discurso sobre el desarrollo y la necesidad de cambios estructurales, más afín a las posiciones de las ONGD más progresistas. Sin embargo, el resultado fue decepcionante. El acuerdo final representa un consenso mínimo entre los países participantes en las áreas de desarrollo, paz y seguridad, derechos humanos y reforma de la ONU. Lo que no representa es una contribución seria a la consecución del octavo Objetivo del Milenio: la creación de una verdadera asociación global para el desarrollo. Tanto las ONGD, como muchos representantes gubernamentales del Norte y del Sur criticaron con dureza la falta de ambición de la Cumbre. Hasta el secretario general de Naciones Unidas criticó que «Todavía no hemos logrado la reforma radical y fundamental que yo y muchos otros creemos necesaria». En la reunión que mantuvo la Campaña de Pobreza Cero con el presidente Zapatero a su regreso de Nueva York, las representantes de ésta declararon que «Creemos que los líderes mundiales no han estado a la altura del mayor reto de la humanidad en el siglo XXI y han defraudado a millones de personas que pedían medidas eficaces y definitivas en la lucha contra la pobreza».

El año 2005 también ha sido el primer año completo del Gobierno de Zapatero, lo que permite hacer las primeras valoraciones del cambio en el rumbo de la cooperación española. En primer lugar debe señalarse que ha habido —como no podría ser menos— un cambio de talante. Se ha recuperado el consenso alrededor del Consejo de Cooperación y la Coordinadora estatal de ONGD ha vuelto a ser uno de los interlocutores principales del gobierno en materia de cooperación, después de años de en-frentamiento por los intentos del gobierno anterior de instrumentalizar las organizaciones de la sociedad civil.

En segundo lugar, el gobierno cumplió con su promesa de aumentar la partida de cooperación en los presupuestos generales hasta alcanzar el 0,3%. Pero lo consiguió gracias a una enmienda en el Congreso a última hora —«por los pelos» según el análisis que realiza Intermon Oxfam. Además existen dudas sobre la factibilidad de realizar todos los gastos presupuestados por lo impredecible de las partidas que más han aumentado —como la condonación de la deuda externa o la financiación a las instituciones financieras

internacionales. Queda por ver, en el informe de la ejecución presupuestaria del año, si la cooperación española ha conseguido aumentar su aportación al desarrollo en términos reales. El presupuesto de cooperación para el próximo año será decisivo para marcar el rumbo correcto hacia la promesa —reafirmada en los últimos meses— de destinar el 0,5% del PIB a la cooperación al desarrollo para el año 2008.

En tercer lugar, el año 2005 ha visto la elaboración del nuevo Plan Director de la Cooperación española, que cubre el período 2005-2008. El nuevo plan marca también un cambio de orientación política, empezando por la forma en que se elaboró, con gran participación de los principales actores implicados. Además vuelve a alinear la cooperación española con el consenso internacional sobre el desarrollo, con un marcado enfoque multilateral y la asunción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio como elementos centrales de la cooperación. No obstante, se ha criticado la falta de concreción en algunos aspectos, sobre todo en cuanto a las cifras que deben acompañar las actuaciones propuestas. El punto más discutido del Plan ha sido el que refiere a la continuidad de los créditos FAD, criticados durante años por ser generadores de deuda externa para los países del Sur y por servir más como instrumento de fomento de las exportaciones españolas que como un instrumento de desarrollo. Con la introducción en el Congreso, al final del año, por parte del grupo de Izquierda Unida, de una propuesta de ley para reformar radicalmente estos créditos, la vía queda abierta para completar esta transformación de la cooperación española que el gobierno central ha iniciado. Pero hará falta mucha presión de los actores sociales para que este deseo se transforme en realidad.

Los resultados en cuanto al tercer pilar de las políticas de desarrollo —el comercio internacional— han sido igualmente decepcionantes. A lo largo del año, todas las organizaciones e instituciones en el campo de la cooperación al desarrollo han estado pendientes de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio que debía completar la llamada Ronda de Desarrollo, que comenzó en Doha en 2001 y que fracasó en Cancún en 2003. Los meses anteriores a la cumbre de Hong Kong en diciembre produjeron un intercambio de acusaciones cada vez más fuerte entre la Unión

Europea y Estados Unidos sobre sus subvenciones a las exportaciones, y entre los países del Norte y del Sur sobre el acceso a sus mercados. El centro de la estrategia de los países del Norte y, dicho sea de paso de la propia OMC, es la liberalización del comercio internacional, lo que se traduce, en la práctica, en demandar a los países del Sur que abran sus mercados a los bienes y, cada vez más, a los servicios de las empresas multinacionales con sede en el Norte. La demanda central de los países del Sur es el acceso libre a los mercados del Norte para sus productos y la eliminación de prácticas de «dumping» —cuando se inundan sus mercados internos con productos a precios por debajo del coste con los que no pueden competir los productos locales. Cuanto más se acercaba la fecha de la cumbre, más se centró el debate en la necesidad de eliminar —o al menos reformar profundamente— la Política Agraria Común de

Luces y sombras, en las calles y en los pasillos

Escrito por Dominic Wyatt

Domingo, 13 de Marzo de 2005 10:21 - Actualizado Lunes, 14 de Marzo de 2011 16:03

la Unión Europea.

Las ONGD y otros actores de la solidaridad organizaron una campaña bastante efectiva alrededor de las implicaciones de la cumbre, coordinada a nivel europeo y con la participación también de la sociedad civil de los países del Sur, que incorporó elementos de presión política, de *lobbying* con los diferentes gobiernos e instituciones, de sensibilización y de movilización en las calles. Debe destacarse el nivel de discurso, liderado por las plataformas nacionales de ONGD, que dejó bien claro que el apoyo a medidas efectivas de desarrollo internacional es una cuestión de voluntad política y que es la falta de dicha voluntad lo que condena a la pobreza a más de la mitad de la población mundial. Al final, la cumbre de la OMC —igual que la Cumbre Mundial de Naciones Unidas antes— cerró con un acuerdo de mínimos que no satisface a nadie y las negociaciones deben retomarse en el 2006. Las ONGD y los demás movimientos de solidaridad deben mantener la presión sobre los Estados del Norte y, en el caso español, entre otros, no dejarse cooptar por el ambiente de interlocución más cercano del gobierno central. La apuesta de la Coordinadora estatal de *ONGD* por la educación para el desarrollo como un elemento imprescindible para la cooperación es una buena señal de que las organizaciones están pensando más en clave de transformación social. ¡Ojalá esta tendencia se consolide en el 2006!